

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.,
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación: 110013335 009 **2015** 00180 00
Demandante: Nohora Inés Quevedo de Vargas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

EJECUTIVO

(No repone, modifica monto de orden de pago)

El Despacho procede a decidir el recurso de reposición, interpuesto por la apoderada de la entidad ejecutada, contra el auto del 16 de marzo de 2015, mediante el cual se libró orden de mandamiento de pago.

La recurrente alegó el incumplimiento de requisitos formales¹ del título, que para el asunto que nos ocupa al no reunirlos el título presentado, no se dan los elementos necesarios para librar mandamiento de pago.

Al estar frente a un título de carácter complejo, señala la demandada, no es suficiente la presentación de la sentencia autenticada; también es necesaria la solicitud escrita presentada por el ejecutante ante la entidad para lograr el cumplimiento de la sentencia judicial.

Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, la recurrente afirmó que el acto administrativo que dio cumplimiento al fallo fue expedido por la extinta CAJANAL y los intereses moratorios estarían a cargo de dicha entidad y no de la UGPP.

Por otra parte, adujo la caducidad de la acción ejecutiva como quiera que posterior a la ejecutoria de la sentencia, y finalizados los 18 meses previstos en el Decreto 01 de 1984, la obligación se hizo exigible para la entidad a partir del 2 de septiembre de 2008, hasta el 3 de septiembre de

¹ <<la existencia de una obligación clara, expresa y exigible...>>

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

2013, término que tuvo la parte ejecutante para presentar la acción ejecutiva, sin embargo la demanda fue presentada hasta el 10 de febrero de 2015, dos años después de haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a la prescripción, indicó que es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el sólo transcurso del tiempo, situación muy diferente a la caducidad, ésta última relacionada con la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para instaurar la correspondiente acción legal.

De esta forma, iteró que la sentencia proferida por este juzgado fue ejecutoriada el 2 de septiembre de 2008, y en virtud del Decreto 01 de 1984, la exigibilidad de la obligación se presenta 18 meses después de ejecutoriada la sentencia, es decir, la demandante tenía hasta el 3 de septiembre de 2013 para presentar la acción ejecutiva, sin embargo la presentó el 10 de febrero de 2015, dos años después de haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

Previamente a resolver, el despacho hace las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión Previa

A folio 22 del expediente en la liquidación efectuada por la entidad ejecutada, se indica como mesadas pagadas sin indexar a la fecha de ejecutoria la suma de \$17.016.864,79, no obstante, para efectos de obtener la suma resultante adeudada por concepto de intereses moratorios, se contabilizó sobre el total de las mesadas atrasadas indexadas a la fecha de ejecutoria (fl. 26), y en consecuencia en forma equivocada se libró mandamiento de pago por la suma de \$21'.467.649,00. Este es un ostensible error que se tiene que corregir, revisando con cuidado las condiciones en que se podría librar orden de pago, no solo por lo que resulta aquí evidente que es una injustificada decisión *ultra petita*.

Por otra parte, para establecer los intereses moratorios que presuntamente le adeuda la entidad demandada a la ejecutante, se aclara que la sentencia proferida por este juzgado el 20 de agosto de 2008, quedó

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 **201500180** 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

ejecutoriada el **28 de octubre de 2008**² y no el 2 de septiembre del mismo año como quedó registrado en la constancia de primera copia suscrita por la secretaria del juzgado (fl. 14 vto), y en el auto del 16 de marzo de 2015, por el cual se libró mandamiento de pago.

Aunado a lo anterior, la extinta CAJANAL, a través de la Resolución UGM 005717 del 30 de agosto de 2011, dio cumplimiento al fallo antes citado, y en la misma se acogió a la fecha de ejecutoria emitida en constancia de primera copia, es decir, no se percató que la fecha de ejecutoria se encontraba errada.

Así las cosas, **en aras de evitar futuras nulidades, esta judicatura tomará como fecha de ejecutoria de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2008 en el expediente ordinario 2006-5790, el 28 de octubre de 2008, y no el 2 de septiembre del mismo año.**

Aunado a lo anterior, el valor liquidado en el proveído que libra mandamiento de pago, se efectuó sobre un valor diferente al de las mesadas pagadas sin incluir el valor de la indexación, monto señalado por la entidad demandada en la liquidación vista a folio 22, esto es, la cantidad de **diecisiete millones, dieciséis mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos con setenta y nueve centavos M/CTE (\$17'016.864,79)**, y no el valor tomado en forma equivocada como base por este juzgado.

Por otra parte, las fechas liquidadas **entre el 3 de septiembre de 2008 al 31 de octubre de 2011** tampoco corresponden, teniendo en cuenta que la inclusión en nómina se efectuó en el mes de **noviembre de 2011**, y la petición de reconocimiento y cancelación de intereses comerciales y moratorios se hizo hasta el **5 de septiembre de 2012**, situación que no es acorde a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 177 del CCA, esto es, si la parte interesada no presenta reclamación dentro de los 6 meses desde la ejecutoria de la sentencia, cesa la causación de intereses de todo tipo desde entonces, hasta que se presente la solicitud en legal forma. Es así como, teniendo en cuenta que los 6 meses de que trata el artículo citado, para el asunto de la referencia comprenden entre el **28 de octubre de 2008 al 27 de abril de 2009**, y se itera, la inclusión en nómina se efectuó hasta el mes de noviembre de 2011, ocho meses previos a la radicación de la reclamación, únicamente se configuró la causación de los intereses moratorios hasta el 27 de abril de 2009, y no hasta el 31 de octubre de 2011 como lo observó la parte actora.

² Por el paro iniciado por ASONAL los días 3 de septiembre a 17 de octubre de 2008, los términos se suspendieron para todos los efectos por esos días.

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Así las cosas, de la nueva liquidación realizada por esta judicatura con las correspondientes correcciones relacionadas con un día posterior a la real ejecutoria del fallo, el período que comprende los 6 meses de que trata el inciso 6 del artículo 177 del CCA, y el valor sobre el cual se liquidan los intereses moratorios, se tienen los siguientes valores:

| Tabla liquidación de intereses moratorios | | | | | |
|---|-------------|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| Capital | | | | | 17.016.864,79 |
| Fecha inicial | Fecha final | Número de días en mora | Interés moratorio efectivo anual | Tasa de interés de mora efectivo diario | Subtotal interés moratorio |
| 28/10/2008 | 31/12/2008 | 64 | 31,53% | 0,0751 | 818.055,82 |
| 01/01/2009 | 31/03/2009 | 90 | 30,71% | 0,0734 | 1.123.970,18 |
| 01/04/2009 | 27/04/2009 | 27 | 30,42% | 0,0728 | 334.441,30 |
| TOTAL | | | | | 2.276.467,29 |

De esta forma, se obtiene la suma de **\$2'276.467,29 por concepto de intereses moratorios causados entre el 28 de octubre de 2008 y el 27 de abril de 2009**, y no la suma de \$21'467.649,00 como se señaló en el auto por el cual se libró mandamiento de pago.

Por otra parte, se procede a estudiar cada una de las razones presentadas por el inconforme contra el mandamiento de apremio.

1.- Incumplimiento de requisitos formales del título. La entidad aduce que analizando el caso en concreto, se puede evidenciar que no se dan los elementos necesarios para librar mandamiento de pago, por no reunir los requisitos formales y de fondo que deben integrar el título; de igual forma señala que estamos frente a un título de carácter complejo, y por tanto dicho título queda investido de unos requisitos adicionales a los que ostenta un título simple, en donde el término complejo hace referencia a que no basta la mera sentencia para exigir su cumplimiento vía jurisdiccional, sino que el mismo debe estar acompañado de todas las formalidades, tales como la solicitud escrita presentada por el ejecutante ante la entidad para lograr el cumplimiento de la sentencia judicial.

Al respecto, es dable destacar que, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, y tal como se estudió al librar mandamiento de pago, las sentencias base de ejecución sí contienen la obligación clara, expresa y exigible frente a la que se libró mandamiento de pago, habida consideración de que, en ellas se ordenó la reliquidación de la pensión de

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

jubilación del demandante con el 75% del promedio de todos los salarios devengados, la indexación de las sumas a reconocer y el cumplimiento de la misma en los términos establecidos en el artículo 177 del CCA, el cual prevé el reconocimiento de intereses moratorios.

La obligación es exigible, puesto que ya transcurrió el término establecido en ese mismo artículo para que esas sentencias fueran ejecutables.

2.- Falta de legitimación en la causa. En efecto, la UGPP dice no estar legitimada para ser demandada en este proceso y pagar los intereses moratorios, no obstante, tal posición ha sido ampliamente debatido por el Tribunal Administrativo³ y el Consejo de Estado⁴, en el entendido de que, con la extinción de CAJANAL EICE, el 12 de junio de 2013, se estableció su sustitución por la UGPP, como entidad que por ley la sucedió, en los derechos y en las obligaciones, incluido el régimen pensional, por lo que opera la sucesión procesal, incluido cumplir las sentencias judiciales.

Los intereses son consecuencia legal, sanción⁵ accesoria para el eventual incumplimiento de la obligación principal, en el caso para el no pago oportuno de la condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sentencia ejecutoriada y vencido el plazo para hacerlo.

La conclusión de los órganos de la jurisdicción, con igual criterio al que se aplica en la cosa juzgada sobre identidad jurídica de partes⁶, pues aquí jurídicamente es la misma parte, hace desestimable esta excepción.

3.- Caducidad. Para abordar la figura jurídica propuesta, es necesario como primera medida establecer como se notifica la sentencia, al respecto el artículo 173 del CCA, e igualmente relevante es determinar que el cumplimiento de la sentencia es obligatorio (artículo 174 ejusdem), lo que para las autoridades dispone el artículo 176 del CCA:

<<ART. 176. Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.>>

³ Tribunal Administrativo de Cundinamarca (19 de enero de 2017. M.P Dr. José maría Armenta Fuentes- Rad. 2015-0688) (9 de febrero de 2017. M.P Dr. Israel Soler Pedraza- Rad 2015-0175) (20 de abril de 2017. M. Samuel José Ramírez Poveda) (01 de junio de 2017 M.P Dr. Luis Alberto Álvarez Parra - Rad. 2015-0476)

⁴ Concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil – 19 de agosto de 2015- rad. 11001-03-06-000-2015-00066-000

⁵ Art. 6 C. C.

⁶ Art. 303 CGP.

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

El inciso 3 del artículo 177 del mismo cuerpo normativo, regula lo concerniente a la efectividad de las sentencias condenatorias contra las entidades públicas y establece:

<<ART. 177.- **Efectividad de condenas contra entidades públicas.** Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada ...

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.>> (Subrayamos).

En cuanto a la caducidad propiamente dicha, el CPACA en su artículo 44, modificó el artículo 136 del CCA, precisando los términos en los cuales opera la caducidad de las acciones hoy medios de control y, en su ordinal 11, estableció la caducidad de la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta Jurisdicción, bajo los siguientes términos:

<<ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

Artículo 136. Caducidad de las acciones.

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial". (Subrayas del despacho).

Tras los 18 meses para la exigibilidad continúan los 5 años para la caducidad, que fue suspendido por espacio de cuatro (4) años, entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013 (Decreto 2196 de 2009 y Ley 550 de 1999).

Tras la interrupción de los cuatro -4- años dispuesta para la prescripción y la caducidad, mientras duró la liquidación de CAJANAL, con los seis -6- años y medio (1/2) indicados, este término se prorroga finalmente para un total de 10 años 6 meses, que al iniciar el 28 de octubre de 2008 vencerían en abril de 2019, lo que evidencia la inexistencia de la caducidad.

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

4.- Prescripción. Al igual que la caducidad esta excepción no tiene vocación de prosperidad, por cuanto según lo previsto en el artículo 2536 Código Civil, la acción ejecutiva se prescribe por 5 años, término que no transcurrió en el sub lite, porque la sentencia quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2008, la exigibilidad fue 18 meses después y la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva tuvo lugar el 14 de enero de 2015⁷.

De esta forma, en atención a que el demandado interpuso recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago el 6 de agosto de 2019, y el expediente fue ingresado al despacho para su resolución el 4 de septiembre siguiente (artículo 118, inciso 4 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA), los términos para excepcionar la demandada se interrumpieron el 4 de septiembre señalado y, por ello, comenzarán a correr una vez se notifique por estado la providencia de la referencia.

Como quiera que con el proceso ejecutivo no obra el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2006-5790, en el cual reposa el original de la sentencia o título ejecutivo, se ordenará el desarchivo del expediente, para lo cual se señalan las siguientes especificaciones:

| | |
|------------------|---|
| Expediente rad.: | 250002325000200605790 01. |
| Demandante: | Nohora Inés Quevedo De Vargas. |
| Demandada: | Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL E.I.C.E.). |
| Ubicación: | Archivo definitivo, caja 16 de 2009. |

En mérito de lo expuesto el despacho

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto de 16 de marzo de 2015 en los términos solicitados por la parte ejecutada.

SEGUNDO: MODIFICAR el monto de la orden de pago que se fija en la cantidad de dos millones, doscientos setenta y seis mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos con veintinueve centavos M/CTE (\$2'276.467,29), por concepto de los intereses moratorios causados entre el 28 de octubre de 2008 y el 27 de abril de 2009.

⁷ Según consulta efectuada en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, dentro del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 2006-5790.

Ejecutivo**Expediente:** 11001333 5009 201500180 00**Demandante:** Nohora Inés Quevedo De Vargas**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)


TERCERO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda a la entidad demandada por el término de cinco (5) días siguientes a la notificación personal de este auto para que pague lo ordenado, o diez (10) días para que proponga excepciones de mérito y solicite pruebas (artículo 442 numeral 1 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA).

CUARTO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos - Archivo, para que desarchiva el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2006-5790, y lo entregue a esta judicatura, para que repose junto con el proceso ejecutivo de la referencia.

QUINTO: Reconocer personería adjetiva al abogado **Gustavo Enrique Montañez Rodríguez**, identificado con cédula de ciudadanía 79.505.485, portador de la tarjeta profesional 129.096 del C. S. de la J., como apoderado especial de la parte demandada, conforme a las facultades otorgadas en el poder obrante a folio 84.

SEXTO: Reconocer personería adjetiva a la abogada **Ángela Julieth Cardozo Veira**, identificada con cédula de ciudadanía 1.115.069.399, portadora de la tarjeta profesional 231.165 del C. S. de la J., como apoderada sustituta de la parte demandada, conforme a las facultades otorgadas en el poder de sustitución obrante a folio 71.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
 Juez

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
 JUDICIAL DE BOGOTÁ DC, SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **OCHO (8) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

MIRYAM YANNETH MARTÍNEZ CORTÉS
 Secretaria